

LAS TENSIONES CREATIVAS DE LA REVOLUCIÓN

La quinta fase del
Proceso de Cambio

Álvaro García Linera

LAS TENSIONES CREATIVAS DE LA REVOLUCIÓN

La quinta fase del Proceso de Cambio



Vicepresidencia del Estado
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional

Av. 26 de Septiembre s/n. La Paz, Bolivia. Tel: (591) 2201 2000. Fax: (591) 2201 2001. E-mail: info@legislativa.gob.bo

BOLIVIA

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

© Vicepresidencia del Estado Plurinacional
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional

D.L. 4-1-135-11 P.O.
Impreso en Bolivia

La Paz - Bolivia

Índice

HACIA UN NUEVO HORIZONTE DE ÉPOCA

DEL REPUBLICANISMO PROPIETARIO AL REPUBLICANISMO COMUNITARIO	7
LAS FASES DEL PROCESO REVOLUCIONARIO	12
PRIMERA FASE: DEVELAMIENTO DE LA CRISIS DE ESTADO.....	12
SEGUNDA FASE: EL <i>EMPATE CATASTRÓFICO</i>	15
TERCERA FASE: CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN CONVERTIDA EN PRESENCIA ESTATAL GUBERNAMENTAL	16
CUARTA FASE: EL <i>PUNTO DE BIFURCACIÓN O MOMENTO JACOBINO DE LA REVOLUCIÓN</i>	18
QUINTA FASE DEL PROCESO REVOLUCIONARIO: LA EMERGENCIA DE LAS CONTRADICCIONES CREATIVAS	23

LAS TENSIONES CREATIVAS DE LA QUINTA FASE

PRIMERA TENSIÓN: RELACIÓN ENTRE ESTADO Y MOVIMIENTOS SOCIALES	28
SEGUNDA TENSIÓN: FLEXIBILIDAD HEGEMÓNICA FRENTE A FIRMEZA EN EL NÚCLEO SOCIAL	38
TERCERA TENSIÓN: INTERESES GENERALES FRENTE A INTERESES PARTICULARES Y PRIVADOS	41
CUARTA TENSIÓN: EL SOCIALISMO COMUNITARIO DEL VIVIR BIEN	62
LAS TENSIONES SECUNDARIAS CREATIVAS COMO FUERZAS PRODUCTIVAS DEL PROCESO DE CAMBIO	72

A un año de la primera gestión de Gobierno del Estado Plurinacional, partimos de una constatación primordial: hoy, el pueblo boliviano ha consolidado su unidad histórica en torno a un único proyecto de Estado, economía y sociedad.

HACIA UN NUEVO HORIZONTE DE ÉPOCA
DEL REPUBLICANISMO PROPIETARIO AL
REPUBLICANISMO COMUNITARIO

Si uno se pone a pensar que hasta hace pocos años existía un *apartheid* institucionalizado que segregaba a las mayorías indígenas de los poderes del Estado republicano desde su fundación o, en la turbulencia e inestabilidad política estructural que vivió Bolivia durante el periodo 2000 - 2005 (cinco Presidentes en cinco años), o en las movilizaciones por la demanda de autonomía que intentaron ser aprovechadas por segmentos fraccionistas de las viejas élites regionales, hoy, cada una de estas históricas divisiones sociales ha sido superada por la consolidación de una estructura estatal plurinacional, autónoma y de un Gobierno Revolucionario que basa su solidez y su estabilidad en la unidad del pueblo boliviano, de sus organizaciones sociales indígenas-campesinas, obreras, vecinales y populares.

Durante los últimos 5 años, se han comenzado a demoler rápidamente los mecanismos racializados de las decisiones estatales que marginaban a las mayorías indígenas. Se ha derrotado al neoliberalismo recuperando el control social y estatal de la riqueza pública, anteriormente enajenada a manos privadas extranjeras. Igualmente se ha puesto fin a décadas de denigrante subordinación de las decisiones gubernamentales a la Embajada norteamericana y a los organismos financieros internacionales. Hoy, como nunca en la historia colectiva de la Patria, indígenas y mestizos compartimos las decisiones del Estado y tenemos las mismas oportunidades en la toma de decisiones públicas.

En estos años se ha comenzado a construir un tipo de Estado autonómico, resolviendo de manera democrática una demanda que amenazó con fisurar la unidad del país.

En conjunto, fracturas y demandas que habían enfrentado a los bolivianos durante siglos, y que habían subordinado al país a poderes externos durante décadas, han sido resueltas mediante métodos democráticos y revolucionarios, tejiendo la unidad soberana de la sociedad y la solidez del Estado.

También se derrotaron a las castas políticas, ineptas, y corruptas que administraron un sistema

de republicanismo-propietario que tanto daño le causaron al desarrollo de nuestro país. Y por último, se triunfó sobre numerosas conspiraciones económicas, políticas e incluso intentos separatistas de la unidad territorial de nuestra Patria.

En este sentido, las divisiones sociales de larga data y las más recientes, que paralizaron las energías vitales de la sociedad boliviana, han venido siendo superadas por el Proceso de Cambio que con la plurinacionalidad, la autonomía y la economía plural está también levantado un nuevo republicanismo del común¹, comunitario, sustentado en la ampliación de la riqueza colectiva de todos los bolivianos.

Pero todos estos logros y estas victorias históricas no hubieran sido posibles sin el movimiento ascendente y envolvente de la unidad movilizada del

1 En su libro *Commonwealth* (2009), Negri y Hardt desarrollan el concepto del republicanismo moderno como “basado en la regla de la propiedad y la inviolabilidad de los derechos de propiedad privados, que excluye o subordina a aquellos sin propiedad”. Como concepto dominante éste se habría constituido en el “fundamento de cada constitución política moderna”. En ese marco, la democracia de la multitud de los pobres se presentaría como “una amenaza objetiva a [esa] república de la propiedad” porque podría desarrollar las potencialidades del proyecto revolucionario republicano (igualdad, libertad) bloqueadas e invisibilizadas por ese concepto hegemónico, es decir, construir una “política de libertad, igualdad y democracia de la multitud”, un republicanismo ya no fundado en la propiedad sino en el libre acceso de todos a los comunes.

pueblo. Hoy, después de una década de intensas batallas, de suturas de los abismos estructurales que separaban al pueblo boliviano, todos los trabajadores del campo y la ciudad han optado por un único proyecto de Estado, economía y sociedad.

No se ve en el horizonte un modelo alternativo de generación y distribución de riqueza distinto al que el Gobierno lleva adelante: de economía plural con liderazgo estatal en los sectores estratégicos de la generación del excedente. No existe una propuesta alternativa al de la plurinacionalidad descolonizadora que consolida una *única nación estatal* en la que conviven múltiples *naciones culturales* y pueblos. No se tiene otra opción de democratización superior del Estado que no sea la del reconocimiento de múltiples formas plurales de democracia (directa, representativa, comunitaria) y de desconcentración territorial del poder a través de las autonomías.

Están sentadas las raíces y posibilidades históricas de un proceso civilizatorio que a la larga tiende a diluir el Estado en la sociedad, en lo que se ha denominado la perspectiva socialista y comunitaria de un *Estado integral*.

Por eso, de manera categórica, sostenemos que ahora el pueblo está más unido que hace años y dé-

cadadas atrás en torno a un gran proyecto societal. Pero esa unidad del pueblo y estos logros de nuestra Revolución Democrática y Cultural no implican que las tensiones, las diferencias internas, las contradicciones y las luchas hayan desaparecido. Al contrario, siguen existiendo, e incluso a momentos se intensifican, pero todas ellas se dan en el marco de representaciones, horizontes y expectativas creadas por ese trípode societal: Estado plurinacional, régimen autonómico, e industrialización de los recursos naturales en el contexto de una economía plural. Este trípode es un *horizonte de época*, y es en su interior que ahora emergen las luchas, las diferencias, las tensiones y contradicciones.

Algunas contradicciones anteriores se han desvanecido, otras han bajado de tono dando lugar a unas nuevas y al reforzamiento de antiguas que no tenían tanto protagonismo como el actual. Se trata de contradicciones y tensiones que tienen dos características fundamentales. La primera, que a diferencia de lo que sucedía años atrás, no propugnan un nuevo tipo de sociedad ni plantean un nuevo horizonte de Estado o economía, sino la ralentización o la radicalización del proceso pero en el marco del *horizonte de época* de la plurinacionalidad.

La segunda, que como son contradicciones al interior de los tres principios ordenadores de la realidad y de las luchas por transformarla (plurinacionalidad, autonomía y economía plural), son también contradicciones al interior del amplio bloque popular que conduce y sostiene el Proceso de Cambio. Incluso las fuerzas conservadoras que intentan utilizarlas para revitalizar su presencia, lo tienen que hacer con el lenguaje y el norte que delimita el *horizonte de época* dominante.

En ese sentido, en términos del ciclo largo de la época revolucionaria iniciada el año 2000, el contenido y movimiento de estas contradicciones son propias de una nueva *fase del proceso revolucionario*, la *quinta* -que analizaremos en detalle-, claramente diferenciada de las contradicciones y luchas que caracterizan las fases anteriores.

LAS FASES DEL PROCESO REVOLUCIONARIO

PRIMERA FASE: DEVELAMIENTO DE LA CRISIS DE ESTADO

La primera fase de esta época revolucionaria se inició con la “Guerra del agua”. Si bien es cierto que años antes hubieron numerosos esfuerzos de acumulación de fuerzas de distintos sectores, la su-

blevación de abril del 2000 marcó una ruptura con todo el consenso pasivo que el neoliberalismo había construido en 15 años. Aunque imparable hasta entonces, se detuvo el proceso de privatización de los recursos públicos, en este caso no estatales: el agua. Como nunca antes había sucedido, regionalmente se articuló en esta movilización un gran bloque social-popular urbano y rural en torno al movimiento campesino-indígena (regantes y productores de hoja de coca), que se convertiría en el precedente de la misma articulación, ahora a nivel nacional, de todos los sectores populares en torno a la candidatura del MAS en los años 2005, 2009. Pero quizá lo más importante para la continuidad de este despertar fue saber que el régimen neoliberal era débil, que se lo podía derrotar, lo que rápidamente dio lugar a un estado de ánimo popular desobediente a las ideas fuerzas emanadas desde el poder y a una predisposición material de la plebe a buscar su unificación y a movilizarse expansivamente.

A esta *primera fase* del ciclo revolucionario la hemos denominado la del *develamiento de la crisis de Estado* porque los pilares de la dominación estatal (institucionalidad, ideas fuerza de legitimación, y correlación de fuerzas entre gobernantes

y gobernados) comenzaron a resquebrajarse irreversiblemente. Es el momento del develamiento de las contradicciones de *larga duración* acumuladas durante siglos (Estado monocultural contra sociedad plurinacional, Estado centralista enfrentado a la apetencia descentralizadora de la sociedad) y de las contradicciones de *corta duración* (nacionalización de las riquezas naturales contra privatización, monopolización de la política contra democratización social).

Las sublevaciones de septiembre-octubre del 2000, en las que se produjo el bloqueo nacional de caminos más largo de nuestra historia (23 días) y las crecientes unificaciones sociales de los sectores populares en torno a un conjunto preciso de nuevas ideas fuerza movilizadoras que emergían de la propia movilización social (asamblea constituyente, nacionalización de los hidrocarburos), polarizaron territorialmente el escenario de las clases sociales en el país. El bloque dominante mantenía el poder, pero al frente tenía líneas internas y externas en las que las clases subalternas de la ciudad y el campo le comenzaban a disputar el control territorial, ideológico y simbólico de la sociedad. Las ideas fuerzas del neoliberalismo que atrajeron

pasivamente a las clases populares, empezaban a deshilacharse aceleradamente frente a otras que crecían en el imaginario colectivo. Cuando ello dio lugar a la constitución de un bloque social con capacidad de movilización territorial y con voluntad de poder, esto es, con voluntad material de disputar palmo a palmo el control y dirección de la sociedad, entramos en la *segunda fase* de la oleada revolucionaria, la del “*empate catastrófico*”.

SEGUNDA FASE: EL EMPATE CATASTRÓFICO

La cuestión no era simplemente que los de arriba no podían seguir gobernando como antes ni que los de abajo no querían seguir siendo gobernados como antes. Lo que sucedió fue que los de abajo querían gobernarse, como nunca antes lo habían hecho, y esa sola determinación paralizó el orden estatal de dominación: dos bloques de poder con dos proyectos de poder; con dos capacidades de presencia territorial y con liderazgos antagónicos se disputaban el orden estatal paralizando hasta cierto punto la reproducción de la dominación.

Existía un empate entre ambos proyectos de sociedad y encima era catastrófico por la irresolución

de la unicidad conducente del poder. Esta segunda fase duró del 2003 al 2008 y las contradicciones que se hicieron presentes enfrentaban antagónicamente e irreversiblemente a dos proyectos de sociedad, de Estado y de economía, portadores de dos voluntades de poder irreconciliables.

TERCERA FASE: CAPACIDAD DE MOVILIZACIÓN CONVERTIDA EN PRESENCIA ESTATAL GUBERNAMENTAL

La *tercera fase* de la época revolucionaria se presentó solapada a la segunda y aconteció con la sublevación política democrática de las elecciones que llevaron a la presidencia al primer presidente indígena y campesino de nuestra historia.

Era un atavismo colonial el que ordenaba las razones vivenciales del mundo para las clases pudientes y las clases subalternas: los indios estaban destinados a ser campesinos, cargadores, sirvientes, albañiles y tal vez obreros, fuera de ello, el universo estaba vacío, no había margen para otro curso de realización social. De la misma manera, las élites mestizas y adineradas habían sido educadas para mandar, dirigir y gobernar con una naturalidad como la que predice que el sol saldrá cada 24 horas por el horizonte. Resulta que este

orden simbólico del universo de un día para el otro se hizo añicos, o peor aún, se invirtió y los dominados, los hijos de mitayos, en contra de todo orden y rigor de las cosas del mundo vividas desde hace 500 años, llevaron a uno de los suyos, a un indio, campesino, trabajador, aymara, a la presidencia de la República. Para la historia racializada del país, fue como si el cielo se hubiera caído, como si los acerados desprecios de inferiorización escalonada con los que la sociedad colonial ordenó el mundo a partir de los colores de piel y apellidos, se convirtieran en polvo ante la insolencia de un campesino entrando al Palacio de Gobierno.

Ese solo hecho ya es con mucho el acto más radical e imperdonable ante los ojos de los pudientes, que la plebe pudo hacer en toda su historia. Sucedió. Los subalternos dejaron de serlo, se hicieron en *común*, presidentes, gobernantes, ante el horror de las miradas coloniales de aquellas estirpes que habían concebido el poder como una prolongación inorgánica de su sangre.

Esta insurrección del orden simbólico de la sociedad que trajo la *pérdida del gobierno*, más no aún del poder por parte de las clases dominantes, constituyó la *tercera fase* del proceso revolucionario que se inició el 22 de enero del 2006 y que sacaría a luz, precisa-

mente, la contradicción antagónica entre gobierno controlado por las clases populares y poder de Estado aún en manos de las clases pudientes y sus aliados extranjeros. Fue un desplazamiento del antagonismo de los dos proyectos de sociedad *al interior del mismo Estado, y de las clases sociales en el Estado*, ahí radica la novedad de la contradicción antagónica.

Nos referimos claramente a una coyuntura política de Estado, dividido entre gobierno controlado por los insurrectos, y poder de Estado (lógica y mando institucional) controlado por las clases económicamente dominantes. En cierta forma es también una radicalización de la segunda fase del *empate catastrófico*, pero la novedad del desplazamiento territorial y clasista de este “*empate*” que se inscribe en la propia institucionalidad dinámica del Estado, hace necesario tratarla como una fase específica.

CUARTA FASE: EL PUNTO DE BIFURCACIÓN O MOMENTO JACOBINO DE LA REVOLUCIÓN

La *cuarta fase* de la época revolucionaria es a la que llamamos en otros artículos como el *punto de bifurcación*, y que en un sentido más poético podría denominarse también el *momento jacobino de la revolución*.

Se trata del momento en que los bloques antagónicos, los proyectos irreconciliables de sociedad que cubren territorialmente la sociedad y el Estado, deben dirimir su existencia de manera abierta, desnuda, a través de la medición de fuerzas, la confrontación (el último recurso que resuelve las luchas cuando no hay ya posibilidades de otra salida).

Eso fue lo que sucedió entre agosto y octubre del 2008.

Tras el fracasado intento de revocar al presidente Evo², la oposición de la derecha neoliberal de la “media luna”, que tenía presencia territorial no sólo en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, sino también en La Paz, Cochabamba y Sucre, optó por el golpe de Estado. Desde inicios de septiembre comenzaría a asumir el control real de las ciudades de esos departamentos impidiendo la llegada de las autoridades nacionales mediante el control de los aeropuertos, hostigando a los mandos policiales y a partir del 9 de

2 El 10 de agosto de 2008, se llevó a cabo un Referéndum Revocatorio, en el que se decidió sobre la permanencia del Presidente Evo Morales, del Vicepresidente Álvaro García Linera y de ocho prefectos departamentales. El Presidente fue ratificado en su cargo con el 67% de votación a su favor. También fueron ratificados los prefectos de Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni, mientras que los de La Paz y Cochabamba fueron revocados.

septiembre lanzándose a la ocupación y destrucción violenta de varias instituciones del Estado bajo mando nacional. En dos días, más de 72 instalaciones gubernamentales resultaron quemadas incluyendo el canal de televisión, la radio estatal, oficinas de la empresa de telecomunicaciones, del Servicio de Impuestos Internos y del INRA. Grupos de choque armados se desplazaron para controlar, o destruir como en el caso de Tarija con el gasoducto que va al Brasil, las redes de distribución de carburantes. Para coronar el golpe y con el ánimo de escarmentar cualquier intento de resistencia popular, asesinarán a una decena de dirigentes campesinos en la localidad de Porvenir, del departamento de Pando.

El Gobierno, que ya había previsto tiempo atrás que un tipo de acción golpista podría darse por parte de la derecha, esperó a que los golpistas desplegaran sus iniciativas que los deslegitimaron ante el pueblo y el mundo como fascistas, racistas y antidemocráticos. Sin embargo, ante la primera muerte se respondió con contundencia, velocidad y fuerza masiva. Se tomó militarmente Pando, el eslabón mas débil de la cadena del golpe, e inmediatamente se puso en marcha un plan de movilización nacional y general de todo

el pueblo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, hacia los bastiones golpistas.

De todas partes del país, desde las comunidades, ayllus, minas, fábricas y barrios, una estructura de movilización social se puso en marcha para defender la democracia y la revolución.

La violencia de los golpistas horrorizó al país entero. El Presidente, al ordenar la expulsión del embajador norteamericano³, los dejó sin estrategia y puente internacional. Los sectores que los apoyaban, asustados, comenzaron abandonar a sus líderes y al mismo tiempo la comunidad internacional al condenar el golpe los dejó aislados. Ante la inminente convergencia de multitudinarias fuerzas sociales populares y Fuerzas Armadas, los dirigentes golpistas tuvieron que capitular.

Se trató ciertamente de un hecho de fuerza, de guerra social puntual en la que los “regimientos” de los bloques de poder en pugna se midieron cara a cara para concurrir al combate. En ese momento ya no contaba el discurso sino el potencial de la fuerza,

3 El 10 de septiembre de 2008, el Presidente Evo Morales declara públicamente al embajador de Estados Unidos en el país, Philip Goldberg, persona no grata e instruye al Canciller David Choquehuanca realizar los trámites diplomáticos para su salida inmediata del país.

y a partir de esa evaluación y antes de la conflagración, los golpistas prefirieron retroceder y rendirse. Ese fue el *punto de bifurcación*, el encuentro de fuerzas que sobre el escenario del combate social dirimieron el control de poder del Estado.

En esta *cuarta fase* las contradicciones llegaron a su epítome real, a su origen y punto de llegada obligatorio como materia estatal: al choque de fuerzas materiales. La fuerza es el Estado en su condición de organización desolada y arcaica, en “última instancia” si se quiere, y en esta fase, la contradicción antagónica por el control del poder estatal tendrá que realizarse y dirimirse en base a la fuerza hasta aquí lograda, acumulada, convencida, pero hecha fuerza desnuda y nada más.

Fruto de esa lucha desnuda de fuerzas, o bien el poder era retomado por las antiguas clases dominantes, o bien asumido por el nuevo bloque de poder emergente. No habían puntos intermedios ni posibilidad de mayor dualidad de poderes; era el momento de la consagración de la unicidad del poder. Por eso, *punto de bifurcación*.

La consensuada modificación congresal de la Constitución en octubre del 2008 continuaría políticamente esta victoria militar y tras el desbaratamiento

del intento contrarrevolucionario del separatismo armado organizado por el grupo La Torre y sus mercenarios contratados en Europa, el bloque nacional-popular quedaría consolidado en el poder con la victoria electoral del Presidente Evo en las elecciones del 2009⁴.

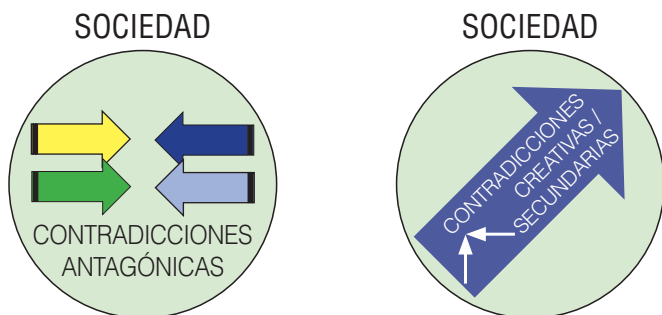
QUINTA FASE DEL PROCESO REVOLUCIONARIO: LA EMERGENCIA DE LAS CONTRADICCIONES CREATIVAS

Esta victoria cierra la cuarta fase o etapa de la época revolucionaria y da inicio a la *quinta* que se caracterizará ya no por la presencia de contradicciones entre bloques de poder antagónicos, entre proyectos de sociedad irreconciliables como sucedía hasta aquí, sino que estará marcada por la presencia de contradicciones al interior del bloque nacional-popular, es decir, por tensiones entre los propios sectores que protagonizan el Proceso de Cambio, que se darán en torno a cómo llevarlo adelante. Se trata por tanto de contradicciones no simplemente secundarias sino *creativas* porque

4 En diciembre de ese año, tras una nueva elección general, el Presidente Evo Morales obtendrá el 64% de la votación, 10% más de lo que había obtenido cuatro años atrás.

tienen la potencialidad de ayudar a motorizar el curso de la propia revolución. Cuando sucede esto, estas tensiones devienen en *fuerzas productivas objetivas y subjetivas* de la revolución.

En toda revolución existen tensiones y contradicciones de dos tipos, en primer lugar están las fundamentales y antagónicas, que escinden estructuralmente las sociedades, y en segundo lugar, las de carácter secundario (aquellas que el Presidente chino Mao Tse Tung llamaba contradicciones en el seno del pueblo) que son superables mediante métodos democráticos y revolucionarios.



A lo largo de la vida de los pueblos y los Estados, las contradicciones fueron, son y serán las *fuerzas productivas* de los cambios, *las fuerzas productivas de la revolución*, el motor de la historia de

las sociedades. En las contradicciones y tensiones se develan los problemas que afligen a una colectividad, se visibilizan las diferentes propuestas de solución de los problemas, y en las conflictividades mismas, develadas por esas contradicciones, es donde la sociedad articula proyectos, alianzas y medios para solucionarlas, parcial o plenamente. Tensiones y contradicciones son por tanto los mecanismos mediante los cuales se logran los cambios y se impulsa el avance de una sociedad, y forman parte indisoluble del curso democrático y revolucionario de los pueblos.

En Bolivia hubieron, existen y habrán distintos tipos de contradicciones: fundamentales, principales, secundarias, antagónicas y no antagónicas. Un ejemplo de contradicción fundamental y antagónica fue la que, entre los años 2000 y 2009, enfrentó abiertamente al pueblo boliviano con sus enemigos: el imperio en alianza con terratenientes y sectores de la burguesía intermediaria aferrados a un neoliberalismo y colonialismo depredador. Fue un tipo de contradicción que tuvo que ser resuelta a favor del pueblo mediante métodos revolucionarios.

En ese mismo periodo (2000–2009) se presentaron contradicciones secundarias que fueron resueltas

y superadas mediante los métodos democráticos de la persuasión, el diálogo, la articulación y la unificación de criterios. Estas tensiones fueron las que enfrentaron el campo y la ciudad, a los trabajadores con el empresariado patriota boliviano, a indígenas y no indígenas. Eran contradicciones secundarias al interior del pueblo que pudieron ser resueltas mediante la construcción de alianzas y de acuerdos sociales en torno a la nacionalización de los hidrocarburos, la ampliación de los derechos colectivos y la igualdad de oportunidades, que garantizaron la unidad de nuestro país para derrotar a los adversarios fundamentales.

Hoy, el 2011, a un año de la instauración de la construcción del Estado Plurinacional, también nos encontramos ante la presencia de contradicciones fundamentales, principales, y secundarias. La contradicción fundamental antagónica sigue siendo la de la unidad del pueblo boliviano enfrentado al imperialismo que se resiste a reconocer nuestra soberanía y capacidad de autodeterminación en la construcción de nuestro destino.

Las contradicciones principales se muestran en la lucha del pueblo boliviano frente a los residuos fragmentados del neoliberalismo, del gamonalismo regional, de la derecha mediatizada y del colonia-

lismo, que se oponen al Estado Plurinacional, a la autonomía y a la industrialización.

Pero también surgen en esta nueva etapa de la Revolución Democrática y Cultural -y es necesario que lo hagan- tensiones secundarias y no antagónicas al interior del bloque popular revolucionario, en el seno del pueblo. Una de éstas tiene que ver con el debate fructífero, democrático y creativo respecto a la velocidad y a la profundidad del Proceso de Cambio. Por ejemplo, hay algunos sectores sociales que piden una mayor profundización de la revolución mediante la nacionalización de una parte de la minería privada, en tanto que otros sectores obreros mineros, consideran que eso no es necesario.

Esas tensiones y contradicciones secundarias, con las que tenemos que convivir, son parte de la dialéctica del avance de nuestro proceso revolucionario y lo alimentan porque son la fuente fundamental del desarrollo, del debate al interior del pueblo y de la transformación social.

Nos detendremos en el análisis de cuatro de ellas para ver cómo es que en su interior está contenida la vitalidad y la fortaleza del Proceso de Cambio hacia el futuro porque son tensiones dialécticas y no con-

tradictorias, que impulsan el debate colectivo sobre el avance de la Revolución Democrática Cultural.

LAS TENSIONES CREATIVAS DE LA QUINTA FASE

PRIMERA TENSIÓN: RELACIÓN ENTRE ESTADO Y MOVIMIENTOS SOCIALES

La primera de estas tensiones creativas, que está siendo resuelta mediante el debate democrático, es la que se refiere a la relación entre Estado – movimiento social. El Estado es por definición concentración de decisiones, monopolio sobre la coerción, la administración de lo público-estatal, e ideas-fuerza que articulan a una sociedad. En cambio el movimiento social y las organizaciones sociales son por definición democratización de decisiones, amplia y continua socialización de deliberaciones y decisiones sobre asuntos comunes. *Gobierno de movimientos sociales* es por tanto una tensión creativa, dialéctica, productiva y necesaria entre concentración y descentralización de decisiones. Como Gobierno se nos exige concentración rápida y oportuna de la toma de decisiones. La gente espera acciones ejecutivas prontas que den respuestas concretas a sus

necesidades materiales. Pero a la vez, como organizaciones sociales indígena-campesinas, obreras y populares en el Gobierno, se tiene una dinámica orgánica que exige debate, deliberación, reconsideración de temas y propuestas, ampliación de participantes en torno a esas decisiones. Y por tanto, el gobierno del Presidente Evo al ser un *Gobierno de movimientos sociales* vive y tiene que vivir continuamente esta tensión creativa entre concentración versus descentralización de decisiones, entre monopolización y socialización de acciones ejecutivas, entre el tiempo corto para obtener resultados y el tiempo largo de las deliberaciones sociales.

¿Cómo resolver esta tensión creativa de la revolución que estamos viviendo y venimos desplegando? El año pasado propusimos el concepto de *Estado integral* como el lugar donde el Estado (el centro de decisiones) comienza a disolverse en un proceso largo en la propia sociedad, y donde ésta última empieza a apropiarse, cada vez más, de los procesos de decisión del Estado. A eso le denominamos *Estado integral* y no cabe duda que constituye la superación dialéctica de esta tensión entre Estado (como máquina que concentra decisiones) y movimiento social (como máquina que desconcen-

tra y democratiza decisiones). Se trata ciertamente de un proceso que no puede ser resuelto a corto plazo y que requerirá un largo proceso histórico, de avances y retrocesos, de desequilibrios que parecieran inclinar la balanza a favor de uno u otro polo poniendo en riesgo ora la eficacia de gobierno, ora la democratización de las decisiones. En realidad nada está previamente asegurado y lo que queda hacia el futuro es vivir con esa contradicción y desplegarla en todas sus variantes y potencialidades. La lucha y sólo la lucha podrá mantener viva la contradicción durante décadas o siglos para que en un momento dado esta disolución del Estado en la sociedad al fin pueda realizarse como resolución histórica de esta contradicción.

Un segundo momento de esta tensión entre Estado y Movimiento Social, y de hecho más importante que el anterior, es el que se da entre la expansión material del Estado social y la función estatal de las comunidades y sindicatos agrarios.

Esta tensión ha sido reiteradas veces mencionada por el presidente Evo en sus reuniones con los sindicatos. Cuenta él, cómo es que anteriormente el sindicato era la institución social encargada no sólo de defender a los afiliados frente a las amena-

zas agresivas del Estado: represión, exacción económica, etc., sino que además el sindicato-ayllu era el encargado de proteger socialmente al afiliado, organizando el trabajo común para construir escuelas, abrir caminos, socorrer a los afectados en caso de desgracias, incluso resolver temas de propiedad de tierras o asuntos familiares.

El viejo Estado colonial solo existió frente al movimiento campesino como una externalidad agresiva de la que no se recibía ni se esperaba nada, por el contrario, había que estar al acecho para protegerse de sus agresiones políticas y económicas. De hecho el colonialismo puede definirse como un estado de guerra perpetuo entre Estado y sindicato-ayllu, atravesado por prolongadas treguas o armisticios temporales de no agresión. Esta guerra suspendida fue denominada erróneamente “pacto de reciprocidad” entre Estado y comunidad debido a la tolerancia entablada entre ambos, a cambio del respeto del acceso a un poco de tierra por parte del ayllu, y a la dominación, por parte del Estado.

Sería reciprocidad si ambos sujetos sociales entregaran algo a “cambio” de la recepción de otro bien aunque de distinta naturaleza. Pero aquí, de lo que se trataba era de treguas entre uno, el Esta-

do que arrebatara lo que no posee: tierras, trabajo y gente, y el ayllu que sólo contiene, cada vez en un espacio territorial menor, la depredación de sus territorios, su riqueza y su gente.

Tanto en tiempos coloniales como republicanos, el Estado no les dio nada ni al sindicato ni al ayllu, y quien se constituyó en la institución encargada de proteger social y políticamente a los miembros de la comunidad fue el propio sindicato-ayllu. El sindicato, como auténtico poder territorial, otorgaba protección social, regulación propietaria, justicia, sentido de pertenencia y de identidad. A esta función protectora y socializadora es a la que el presidente Evo ha denominado el sindicato-Estado porque es el sindicato el que objetivamente se constituye como poder social, político, territorial y cultural.

Sin embargo, la lucha del sindicato por la descolonización del Estado que ahora encabezan las organizaciones sociales, desde el Gobierno, ha significado precisamente poner fin a este estado de guerra entre sindicato y Estado, apropiándose, modificando la estructura social, funciones y composición interna del Estado. Se trata de una demanda de democratización radical del Estado con el fin de hacer de él una maquinaria de protección social, de

ampliación de derechos y de unificación participativa de la sociedad como corresponde a un Estado democrático-social. Nos referimos a la apropiación del Estado por parte del sindicato-ayllu en lo que se refiere a sus funciones organizativas y de gestión, es decir, la socialización y comunitarización creciente del poder como parte de una profunda revolución política de la sociedad, aunque al hacerlo, al cambiar el contenido social del Estado, construir la función social-protectora del mismo como iniciativa y programa revolucionario de los sindicatos indígena-campesinos, paradójicamente se está a la vez perdiendo el poder territorial del propio sindicato que ahora comienza a dejar de lado funciones protectoras (salud, educación, carreteras, comunicación, apoyo ante los desastres, cohesión interna) que ahora pasan a ser ejecutadas por el Estado.

Resulta así que las luchas de descolonización y apropiación del Estado por parte del sindicato-ayllu están llevando a un repliegue de su propio poder como micro-Estado. De esta manera, ahora en cada lugar del país, el sindicato ya no se organiza para construir una escuela, una posta sanitaria, para abrir una carretera que comunique a sus habitantes, para levantar un puente entre poblaciones o para

dar ayuda a los desamparados. No. Ahora se pide la escuela, la posta sanitaria, el camino, el puente y el amparo ante la desgracia al municipio, a la gobernación, al gobierno nacional. Y no importa el lugar donde se viva, la apropiación del Estado por parte de las organizaciones sociales ha creado la conciencia práctica de derechos y de protección social que hace recaer en el Estado y sus instituciones el cumplimiento de sus derechos colectivos, en detrimento de la función estatal-local del sindicato-ayllu.

Sucede así que la apropiación del Estado por parte del sindicato es también una apropiación del sindicato por parte del Estado, que puede llevar a un debilitamiento del mismo sindicato-ayllu, de su poder de gestión y cohesión.

De esta manera la construcción del *Estado integral*, entendido como expansión democratizada de las funciones sociales del Estado, reivindicada por la propia sociedad organizada que anteriormente estaba excluida de esas funciones, lleva el riesgo de un debilitamiento de las propias estructuras de los trabajadores creadas autónomamente para gestionar las necesidades y la protección social. Pero si las organizaciones sindicales no avanzan en esta ocupación-expansión del Estado social, éste regresa

a su situación de apariencia, de parcialidad colonial que beneficia a pocos, y los sindicatos regresan también a su función de estructuras locales, corporativas fragmentadas y sin sentido de universalidad, de comunidad universal.

De momento, y seguramente por muchos decenios hasta que la humanidad invente otras estructuras y a los seres humanos capaces de crearlas y sostenerlas, que administren lo universal, lo general, lo comunitario-universal, será a través del Estado, de sus funciones de gestión socializada, que los pueblos puedan expandir territorialmente la comunitarización del uso de lo *común* y la universalización de la satisfacción de las necesidades humanas.

Los sindicatos y la sociedad necesitan expandirse, apropiarse, democratizar las funciones de gestión y protección por parte del Estado, y la nueva conciencia social que le exige eso al Estado es una prueba de ese avance. Si se detienen en su avance, la revolución como obra colectiva se detiene y los sindicatos regresan a sus funciones localistas, dejando en manos de la burocracia la administración de lo universal y a corto plazo dando inicio a la restauración del viejo Estado colonial “aparente”. De hecho, las críticas al Gobierno de falta de “eficien-

cia”, de “capacidad”, con las que atacan los partidos de derecha e intelectuales conservadores, conforman el nuevo lenguaje racializado con el que las viejas élites restauracionistas buscan descalificar a indígenas, trabajadores y campesinos, que difícilmente, y con altibajos, aprenden la gestión de lo común, de lo público.

Pero entonces cómo avanzar en la democratización expansiva del Estado-social a cargo de los sindicatos-ayllus sin debilitar las estructuras sindicales y comunitarias autónomas que tiene la sociedad. Se trata de una tensión necesaria y creativa del proceso revolucionario. Detenerse es retroceder en el cambio. Avanzar, es crear riesgos de debilitamiento de la autonomía social. Y ante ello, no queda más que seguir adelante, revolucionarizar las condiciones de la propia revolución, asumiendo los riesgos, reconociéndolos a cada momento y trabajando para remontarlos.

Por la experiencia hasta ahora desarrollada en estos años por algunas organizaciones, es posible expandir la presencia del Estado social como protector de derechos (salud, educación, transporte, servicios básicos, protección ante desastres, acceso a tecnología, etc.) en tanto el sindicato-ayllu man-

tiene, refuerza y expande su acción autónoma comunitaria al ámbito de la producción de riqueza, a la creación de un nuevo modo de producción material de la riqueza cada vez más asociativo, más comunitario, más social. Es ahí, en la producción, que la fortaleza comunitaria tiene ya un capacidad heredada (control comunitario del agua, acceso a la tierra, pastos comunales, rotación de cultivos, formas de circulación de la fuerza de trabajo) que puede ser el punto de partida de una intensificación interna en el propio proceso de producción local (familiar-comunal) y en la articulación productiva con otras comunidades.

Es en la creación de un nuevo modo de producción material crecientemente socializado, expansivamente comunitarizado que se juega el destino post-capitalista de la sociedad y del mundo y es ahí donde podrían comenzar a concentrarse las potencias, las energías autónomas comunitarias de los sindicatos y de los ayllus. De esta manera también el poder político de los Movimientos Sociales podría devenir en poder económico directo, sin mediación estatal, sobre el cual podrían darse con el tiempo nuevos ascensos revolucionarios que empujen la autodeterminación de la sociedad a peldaños más altos.

Como se ve, es en esta tensión, en esta contradicción creativa al seno mismo de la acción colectiva de la sociedad organizada que se pone en juego el avance de la revolución y la inminencia de su retroceso. Pero no hay otra manera más de avanzar que no sea afrontando las tensiones y contradicciones como *fuerzas productivas de la propia revolución*. El no querer dar el salto con el único objetivo de no asumir riesgos ni generar contradicciones es ya un retroceso. Las revoluciones sólo existen si avanzan, si luchan, si arriesgan, si saltan a veces por encima del vacío sin la seguridad de que del otro lado exista tierra firme. No hacerlo implica ya dejar de ser revolución.

SEGUNDA TENSION: FLEXIBILIDAD HEGEMÓNICA

FRENTE A FIRMEZA EN EL NÚCLEO SOCIAL

Una segunda tensión creativa es la que se da entre la amplitud social del proceso revolucionario (la incorporación creciente de muchos sectores) y la necesidad de garantizar la conducción indígena, campesina, obrera y popular del mismo. Es una contradicción que uno puede visualizar, por ejemplo, entre trabajadores, obreros, asalariados y el sector empresarial.

La forma de su resolución es la ampliación, la apertura y la conversión del significado de pueblo a todas y todos los bolivianos -sin excepción- que apuestan por la descolonización, por el Estado Plurinacional, por la igualdad entre los pueblos, por la autonomía democrática de las decisiones, por el comunitarismo y la industrialización rectora de la economía plural, en fin, que apuestan por el *Vivir Bien*.

Pero así como se tiene que apostar a una gran amplitud social que incorpore a vastos sectores -incluso de carácter empresarial, vinculados y de profunda convicción patriótica-, es imprescindible reforzar y garantizar el núcleo duro de la revolución: los pobres, los humildes, los campesinos, los indígenas, los obreros, los vecinos, que no cabe duda que son, en las buenas y en las malas, el núcleo, el baluarte y la garantía de la conducción precisa y justa de nuestro proceso revolucionario.

La hegemonía del bloque nacional-revolucionario exige no sólo la cohesión de las clases trabajadoras indígenas, obreras y populares, sino la irradiación de su liderazgo histórico, material, pedagógico y moral, sobre las otras clases sociales que abarquen a la inmensa mayoría de la población boliviana. Siempre habrá un segmento reacio

a cualquier liderazgo indígena y popular, y actuará como correa de transmisión de poderes externos. Pero la continua consolidación del liderazgo plebeyo requiere que las otras clases sociales, al tiempo de ser reeducadas en los intereses colectivos como unidad suprema del país, consideren que su propia situación personal está mejor conducida bajo el mando nacional de las clases trabajadoras.

Esta amplitud de acuerdos, de articulaciones sociales, coloca a los sectores populares dirigentes ante el desafío de tener que incorporar parte de las necesidades de los bloques sociales diferentes, y esto emerge como contradicción al principio secundaria, pero con la potencialidad de devenir en contradicción fundamental si no se sabe regular la tensión, debilitando la propia conducción indígena-popular del proceso revolucionario.

Por lo tanto, la necesidad de amplitud social para consolidar la hegemonía histórica conlleva a la vez el riesgo de debilitar la hegemonía por ampliar demasiado la estructura de intereses colectivos conducentes del proceso.

No existe una receta ni modelo para salir de esta contradicción propia de la construcción de las hegemonías. Sólo el debate, las tensiones, las recti-

ficaciones continuas entre firmeza de liderazgo del núcleo social revolucionario y amplitud hegemónica pueden desplegar esta contradicción necesaria, y canalizarla como fuerza impulsora de la dinámica revolucionaria.

TERCERA TENSION: INTERESES GENERALES FRENTE
A INTERESES PARTICULARES Y PRIVADOS

Una tercera tensión creativa de nuestro Proceso de Cambio, y la que con mayor intensidad se ha manifestado desde hace un año, es la que se da entre el interés general de toda la sociedad y el interés particular de un segmento individual de ella, entre las demandas que buscan satisfacer las necesidades de todo el pueblo como modo de resolución de la demanda de uno, y las movilizaciones que apuntan solamente a satisfacer las necesidades de un grupo particular, un sector o un individuo. Contradicción entre lo general y lo particular, entre la lucha común, comunitaria, comunista, y la búsqueda del interés individual, sectorial, particular y privado.

El largo ciclo de movilizaciones sociales que se inició el año 2000 con la Guerra del agua, comenzó

como una movilización regional pero que desde el principio contenía no sólo a toda la región sino a todo el país en torno al rechazo a la privatización del agua. El privatizar a la empresa municipal afectaba tanto a regantes campesinos como a usuarios de la ciudad de Cochabamba, lo que brindó la base material para la unificación universal de las clases sociales populares y medias del departamento. Y en la medida en que se resistía una política de carácter nacional como eran las privatizaciones, inmediatamente esa resistencia se convirtió en el referente de movilización general del pueblo contra el régimen político y el modelo económico privatista.

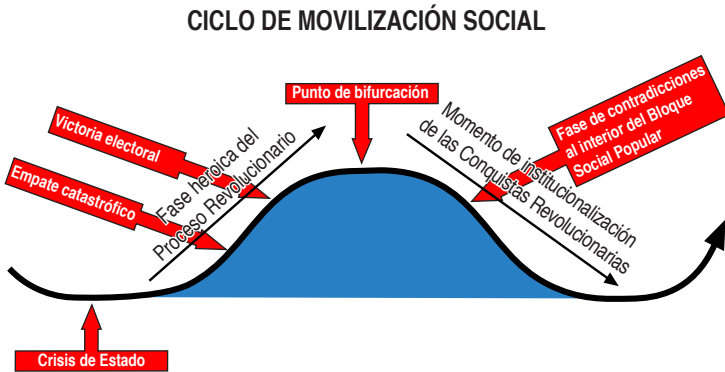
Posteriormente, la Guerra por el gas, la demanda por la asamblea constituyente y la construcción de una democracia plurinacional fueron reivindicaciones sectorialmente generadas por indígenas, vecinos y obreros, pero que contenían cada una a la nación entera, a un bloque social de oprimidos y dominados de las clases subalternas que reunían a la mayoría real de la sociedad. Esto permitió construir un programa de toma del poder a partir de un proyecto de reivindicaciones universales capaz de movilizar y unificar crecientemente a la mayoría del pueblo boliviano. La victoria electoral del MAS, el

año 2005, se debió a su capacidad de levantar como voluntad de poder viable este proyecto universalista de poder popular y es lo que consolidó programáticamente al Gobierno del Presidente Evo como un *Gobierno de los movimientos sociales*.

Tras la victoria lo que se hizo fue llevar adelante ese programa construido en las barricadas, en los bloqueos de carreteras, en las marchas e insurrecciones populares de los años previos. La Asamblea Constituyente fue la primera medida de alcance general que se impulsó, defendió, consagró y permitió, por primera vez en la historia, que la Constitución Política del Estado sea redactada por los representantes directos de todos los sectores sociales del país. La nacionalización de las empresas (YPFB, ENTEL, ENDE, Huanuni, Vinto) materializaron otras de las demandas universales de los trabajadores bolivianos y la redistribución de una parte del excedente económico (Renta Dignidad, Bono Juanito Pinto, Bono Juana Azurduy) y su redireccionamiento hacia los sectores anteriormente excluidos: créditos productivos con intereses reducidos en el ámbito urbano y rural, transferencias directas a los más necesitados, triplicación de los ingresos de alcaldías y gobernaciones, política de integración ca-

minera, incrementos salariales, mayor atención a los sectores de salud y educación, etc. Todas esas medidas convirtieron el uso del Presupuesto del Estado, anteriormente monopolizado para beneficio particular por unas diminutas élites empresariales, en fuerza y poder económico general del pueblo.

Si visualizáramos el ciclo de la movilización social como una curva ascendente que se estabiliza y vuelve luego a declinar gradualmente, podemos señalar que la primera etapa o fase ascendente de esta “curva de movilización”, se caracteriza por la creciente articulación de sectores sociales, la construcción de un programa general de movilización y el surgimiento de una voluntad organizada y práctica de poder de las clases subalternas. Es en esta fase ascendente que se visibiliza la crisis de Estado, se amplía como “*empate catastrófico*”, esto es de antagonismo entre dos proyectos históricos de sociedad y Estado, dos voluntades de poder social y dos bloques de fuerzas de movilización territorializadas. Incluso la victoria electoral que vence el atávico prejuicio colectivo de que los indios no están capacitados para gobernar pertenece a este momento de rebelión ascendente de la sociedad. Esta es la fase heroica del proceso revolucionario.



La estabilización de la movilización, la altiplanicie de la curva, es el momento de la implementación de los primeros objetivos generales y universales de la movilización colectiva, y también de las resistencias más agresivas, conspirativas, golpistas y separatistas por parte del bloque de poder neoliberal descendente. A cada instante, el proceso se juega la vida al implementar el programa general del pueblo ante el rechazo violento de las clases dominantes desplazadas del control del poder estatal. Es el momento de la fase guerrera y estrictamente jacobina del proceso que al tiempo de llevar al movimiento social, convertido en poder de Estado, a defenderse de sus enemigos de clase, recrea nuevas movilizaciones de defensa y nuevos horizontes de universalidad programática, como la implemen-

tación de la desconcentración territorial del poder (diversas formas de autonomía regional y cultural), la universalidad de los servicios, la redistribución de tierras, la defensa de los derechos de la Madre Tierra, el inicio del debate en torno a la industrialización de las materias primas.

La victoria militar, política y moral del bloque popular revolucionario sobre las clases dominantes desplazadas (el “*punto de bifurcación*” de agosto-septiembre del 2008), el desmantelamiento del intento separatista de la integridad territorial boliviana (marzo del 2009), y la consolidación electoral de esta victoria en diciembre del 2009, darán lugar al inicio del declive gradual y por oleadas del gran ciclo de movilizaciones.

Es el momento descendente de la gran oleada de movilización social iniciada 9 años atrás. Y como sucedió en las dos etapas previas, esta nueva estará marcada por la tensión de dos líneas de acción. La primera etapa de ascenso de la curva de movilización estuvo tensionada por la posibilidad de articulación de una voluntad colectiva de poder y la fragmentación regionalizada e impotente de la acción colectiva, la segunda por el despliegue universal del programa de reivindicaciones populares construido

previamente y el riesgo inminente de una acción contrarrevolucionaria que haga retroceder a la sociedad décadas de conquistas sociales. Y esta tercera etapa, la descendente, estará a su vez signada por la tensión entre la consolidación institucionalizada de las demandas universales y generales del bloque social-revolucionario, y la fragmentación corporativista, sectorialista del bloque popular, a partir de la cual a la larga podría rearticularse un nuevo bloque conservador de derecha.

Se trata de una contradicción real al interior, en el seno del pueblo, y la continuidad del proceso revolucionario boliviano dependerá de las formas democráticas y revolucionarias que se adopten para canalizarla y regularla potenciando y tomando partido por la tendencia universalista, general, comunitaria, revolucionaria, en detrimento de la tendencia particular, privatizante, conservadora.

Esta tensión al interior del bloque social popular, entre lo *general* que beneficia a todos y lo *particular* que sólo beneficia a unos pocos, es lo que precisamente estamos viviendo desde el año 2010. Una victoria de la voluntad universalista del bloque indígena-obrero-popular permitirá la consolidación expansiva y hegemónica del proceso revolucionario. Por el

contrario, si triunfa el particularismo corporativista y gremialista en el accionar del pueblo, se marcará el inicio de un proceso degenerativo de la revolución, y será el punto de partida para la *restauración* conservadora del bloque empresarial adversario del pueblo.

Esto es lo que no entienden algunos intelectuales arrepentidos que sustituyen la realidad por divagaciones conceptuales, que nunca se mancharon en el fragor de las batallas reales de la plebe y que ahora, ante las recientes e inevitables dificultades de esta nueva fase, abandonan el barco al que se adhirieron por moda para regresar al seno de la clase media de la que nunca se desprendieron realmente.

Esta tensión entre las demandas universales y las demandas particulares al interior del pueblo estuvo presente desde un inicio, y de hecho la revolución es precisamente la constante revolucionarización del ser colectivo del pueblo como sujeto fragmentado e individualizado y por ello dominado, para auto-constituirse en ser colectivo comunitarizado, en unificación continua y reiniciada, una y otra vez. Pero antes no adquiría un carácter visible y decisivo como para caracterizar la época. Ahora sí sucede ello, y el punto de inicio de esta nueva etapa de la curva de movilización se da a inicios del año 2010.

A fines del mes de junio, un grupo de dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), organización de los pueblos indígenas de tierras bajas, iniciaron una marcha desde el norte del país para exigir se atiendan sus demandas. La movilización fue forzada, pues el Presidente previamente había citado a los dirigentes a reunirse con él, cosa que no fue tomada en cuenta básicamente por el hecho de estar a pocas semanas del Congreso de la CIDOB donde se debía renovar la directiva. Tomar decisiones radicales de fuerza antes de los congresos, como también sucederá luego con la COB, suele ser un mecanismo de reposicionamiento político de los dirigentes para la reelección.

Pero al margen de ello, la movilización ampliamente publicitada por los medios de comunicación en propiedad de viejos militantes de partidos políticos neoliberales, se llevó adelante durante varios días reivindicando una propuesta que fraccionaba el bloque social revolucionario. Los dirigentes exigían que las tierras fiscales en tierras bajas, incrementadas de 300.000 a más de 7 millones de hectáreas por acción del Gobierno con la reversión de varias haciendas, pasen a propiedad *exclusiva de los*

pueblos indígenas de tierras bajas y no se las dote a los pueblos indígenas de tierras altas y de los valles.

La Constitución Política del Estado reconoce en igualdad de condiciones y derechos para acceder a esas tierras, a todos los pueblos indígenas y organizaciones campesinas, y de hecho las naciones indígena-campesinas de los valles y tierras altas constituyen, según el último Censo de población y vivienda, más del 60% de la población boliviana, en tanto que los pueblos indígenas de tierras bajas agrupan a cerca del 3% de los pueblos indígenas, y pese a su número, en los últimos años se les ha reconocido más de 11 millones de hectáreas a su favor⁵.

Pedir que las tierras fiscales se asignen exclusivamente sólo al 3% de la población indígena-campesina del país dejando de lado al 97% restante, que es la que más necesita, no solamente era un despropósito social sino además un acto lamentable de faccionalismo y egoísmo sectorial frente a las necesidades del resto del movimiento indígena campesino del país.

5 Según datos del INRA, desde 1996 se titularon 40 millones de hectáreas, de las cuales 16 corresponden a TCO's: 4, 5 millones a las de tierras altas (La Paz, Oruro Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) y 11, 5 millones a las de tierras bajas.

Claramente se trataba de una mirada corporativa, privatista de lo público que logró la más amplia adhesión de todas las fuerzas conservadoras del país para intentar demostrar que los propios indígenas se separaban del Gobierno.

El Gobierno del Presidente Evo no podía dar luz verde a semejante reivindicación, arriesgándose a ir en contra de los principios igualitarios y de justicia. Aún así, los medios de comunicación aprovechándose de este planteamiento discriminatorio buscaron mostrar que “las propias bases indígenas se enfrentaban” al Presidente indígena.

En realidad esto era falso, pues las bases de los pueblos indígenas de tierras bajas mantuvieron su apoyo militante al Presidente, sus iniciativas generales eran y son permanentemente articuladas a los proyectos de gestión gubernamentales y sus representantes participan en los distintos niveles de legislación del sistema de gobierno regional, departamental y nacional del país.

De lo que se trataba entonces era de una movilización de dirigentes que habían perdido el horizonte del interés general del proceso, que dejaban de lado la búsqueda de reivindicaciones colectivas favorables para todos, y que se habían agrupado en torno a un

sobredimensionamiento de lo gremial, lo corporativo, lo privado, que no sólo dejaba de lado los intereses de la inmensa mayoría de los pueblos indígenas del país, sino que dañaba su vínculo con todo el bloque popular. De ahí que los que más aplaudieron la marcha fueron los de la derecha mediática.

Lo que hizo el Gobierno fue mantener en alto los intereses colectivos generales de *todos* los trabajadores, de *todos* los indígenas y explicarle al pueblo que una demanda así no se podía cumplir porque podría agredir y fracturar la unidad de todos los pueblos indígenas tan difícilmente construida en la última década, e hizo llamados a los dirigentes de la CIDOB a abandonar su actitud sectorialista.

Utilizando métodos democráticos de debate, de mutuo aprendizaje y persuasión al interior del pueblo, el Gobierno explicó el carácter conservador del pedido y al final los compañeros dirigentes rectificaron su equivocación desechándolo. Sin embargo, el daño ya se había causado al desportillar la relación entre pueblos indígenas de tierras altas con pueblos indígenas de tierras bajas, y de ambos con el resto de los sectores populares.

Fue una contradicción secundaria al interior del movimiento popular que si bien inicialmente

afectó la alianza entre sectores, con el tiempo sirvió de base para profundizar el debate democrático y pedagógico entre los distintos sectores sociales populares en torno al impulso de las demandas colectivas de carácter general, universal, que reactuales, en condiciones superiores, la unidad de las clases subalternas. Los frutos de ello se verán casi un año después cuando las distintas organizaciones indígena-campesinas del país que forman el bloque de poder estatal, elaborarán un proyecto de ley de Desarrollo Económico, privilegiando precisamente el interés común de todos, y de todos ellos con el propio pueblo urbano y asalariado.

Meses después, el conflicto con las instituciones urbanas de la ciudad de Potosí tendrá características similares en el marco de esta tensión conflictiva entre intereses generales e intereses particulares.

Iniciado por una disputa acerca del lugar donde debería instalarse una fábrica de cemento en el departamento, la dirigencia cívica potosina acicateará sentimientos regionalistas en torno a la “defensa” de los límites departamentales con otro departamento hermano (no con algún adversario extranjero sino con Oruro), dando lugar a un paro de actividades varios días en la ciudad.

Pese al pedido expreso del Presidente de reunirse con los dirigentes días antes, la huelga se llevó adelante en torno a reivindicaciones que la dirigencia cívica había impedido resolver anteriormente (la puesta en marcha de Karachipampa entregada por decisión cívica a un empresa norteamericana que no invirtió nada durante años), que no dependían del Gobierno (acuerdo entre cooperativistas y cívicos para preservar la estructura del Cerro Rico), o que ya estaban en ejecución (aeropuerto en el departamento, carreteras, etc.).

Aprovechando un sentimiento regional, al final la movilización llegó al mismo punto de partida en cuanto a resultados reales, pero claro nuevamente las fuerzas políticas conservadoras de derecha intentaron mostrar a una ciudad enfrentada al Gobierno, cuando en realidad la mayor parte de las exigencias ya estaban en ejecución antes del conflicto.

Una vez más la mirada exclusivamente local, sectorializada, fisuró el bloque social nacional, y el Gobierno al tiempo de ratificar el cumplimiento de las demandas regionales volvió a defender, en primer lugar, los intereses comunes a todos los sectores populares del país.

El último conflicto del mes de abril del 2011 entre dos fracciones de la COB y el Gobierno, muestra

con mayor claridad esta compleja contradicción entre lo privado y lo común, entre lo particular-gremial y lo general-nacional.

Dos sectores sindicales promovieron la protesta. Inicialmente fueron los dirigentes de los asalariados de la Caja de Salud que salieron a oponerse a un derecho constitucional, la implementación del Seguro Universal de Salud.

En Bolivia, la mayor parte de los trabajadores del país son campesinos, microproductores, artesanos, comerciantes, asalariados precarios, que carecen de seguro de salud. El presidente Evo, desde el año 2006, promovió la universalización de la atención de este servicio como un acto de justicia social imprescindible para proteger a toda la población del país. La iniciativa llegó al Congreso y fue frenada por la oposición que controlaba el Senado y la mayor parte de las prefecturas, hoy gobernaciones.

Con las elecciones del 2009, el partido de gobierno obtiene la mayoría en ambas Cámaras legislativas y dirige la mayor parte de las gobernaciones, con lo que se hace posible llevar adelante esta gran reivindicación general que beneficia a la mayoría del pueblo.

Pues bien, los dirigentes de la Caja Nacional de Salud se movilizaron para oponerse a esta univer-

salidad del derecho a la salud argumentando que el Gobierno quería confiscar los recursos de las “Cajas” para implementarla. Se trataba ciertamente de una reivindicación ultra-conservadora, y encima errónea porque el Gobierno explicó, antes del conflicto, que este seguro contaría con nuevos recursos económicos para su implementación.

Pero esos argumentos no importaron. El temor corporativo de la dirigencia sindical de ver afectados intereses materiales privados ante los cambios que pudiera promover esta universalidad del derecho a la salud, llevó a que el sector declarara un paro de actividades de 2 semanas, que no sólo bloqueó el debate respecto al tema sino que dejó sin atención de salud a miles y miles de asalariados asegurados que acudieron a los centros públicos para ser atendidos.

El otro sector de la COB que se movilizó con un paro de actividades, fue el de los maestros urbanos y rurales. Como lo vienen haciendo regularmente desde hace años, centraron su reclamo en torno al incremento salarial.

El Gobierno del Presidente Evo, desde el año 2006, dada la importancia social de los sectores de salud y educación, incrementó sistemática y crecientemente los salarios de los trabajadores de

esos sectores, y lo hizo de tal manera que siempre se garantizó un aumento salarial anual por encima de la inflación, es decir un incremento permanente de sus salarios reales. Entre el año 2006 al 2011, ambos sectores tuvieron un aumento del 55% mientras que otros de la administración pública (funcionarios de ministerios y burocracia estatal) mantuvieron sus salarios congelados. Desde que asumimos el Gobierno, el Presidente, el Vicepresidente, los ministros y viceministros trabajamos con salarios que fueron reducidos entre un 30 a 60% o más (en el caso del Presidente).

No dudamos que los funcionarios de salud y educación requieran un mayor ingreso, pero también está claro que no se puede hacer todo de manera inmediata, y ese incremento en la remuneración debe venir como resultado de un aumento en los ingresos del país en su conjunto. La política de austeridad administrativa que lleva adelante el Gobierno, tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de los sectores más necesitados y concentrar los recursos provenientes de la nacionalización y de los ingresos de las empresas estatales para impulsar una base mínima industrial en el ámbito de los hidrocarburos, la minería, la agricultura y la electrici-

dad para que generen riqueza de manera sostenible, de tal forma que esos recursos sean utilizados para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, tanto de la ciudad como del campo.

Las necesidades son tan grandes en una sociedad en la que más de la mitad de la población es pobre, que los pocos recursos no alcanzan para mejorar la vida de todos a la vez, y entonces con lo que se tiene, deben apalancarse nuevos ingresos, a partir de una nueva base industrial que movilice las energías productivas de la mayor parte de la sociedad, que originará gradualmente mayores excedentes capaces de ser utilizados para satisfacer crecientemente las innumerables necesidades básicas de los distintitos sectores sociales.

Desde la mirada salarialista del magisterio, los recursos ahorrados durante estos años de nacionalización deberían ser directamente utilizados para mejorar los ingresos de unos cuantos sectores asalariados de servicios, dejando de lado a otros mayoritarios en el país, asalariados y no asalariados, y anulando indefinidamente cualquier propuesta de construcción de una base material industrial que produzca un mayor excedente económico.

Se trata ciertamente de una disputa por el uso productivo e improductivo del excedente económico.

La clase media estatal del sector educativo y de salud, o al menos una parte de ella, impulsaba el uso corporativo y hasta privado de los recursos públicos, llegando a plantear que las Reservas Internacionales se usaran para incrementar salarios. Por el contrario, el Gobierno y los principales sectores obreros (de Huanuni, Corocoro, Vinto, YPFB) e indígena-campesinos del país defendían un uso productivo, industrial y agrario del ahorro colectivo nacional porque sólo de la creación de un mayor excedente económico -resultado de ese uso-, se tendrán mayores ingresos para mejorar sustancialmente los salarios de todas y todos los trabajadores y para el acceso a mayores servicios públicos para toda la población. De ahí que la huelga general indefinida de la COB se redujera a la parálisis de los servicios de salud pública y a la suspensión de actividades de una tercera parte de los funcionarios del magisterio. El resto de los obreros de la minería estatal, del sector petrolero, los fabriles, los campesinos y artesanos, es decir el 95% de la clase trabajadora, mantendría sus actividades normalmente y rechazarían esas iniciativas de privatización sectorializadas de los recursos del Estado.

Aprovechando esta tensión al interior del bloque popular, la derecha conservadora no sólo le

brindaría una abrumadora presencia mediática a la movilización, sino que durante semanas convertiría a varios dirigentes de la COB, anteriormente despreciados por su origen popular, de la noche a la mañana, en *vedets* televisivos de los espacios de noticias y de opinión de la cadena mediática opositora. Claro, lo que buscaba era utilizarlos para enfrentar y criticar al Gobierno, en horas estelares. Y con una ingenuidad complaciente, algunos dirigentes cayeron en esa manipulación política por lo que acabado el conflicto retornaron a su anonimato. Informaciones posteriores confirmarían una red de vínculos entre unos dirigentes de esos sectores y el segmento más cavernario de la derecha política boliviana asesorada por su par norteamericana.⁶

Con todo, la huelga de maestros y salubristas visibilizó nuevamente esta tensión entre tendencias corporativas y hasta cierto punto privatistas al interior del bloque popular, frente a las tendencias comunitaristas y universales del bloque popular.

6 El 14 de Mayo, el Ministro de Gobierno, Llorenti, da a conocer que en base a una investigación sobre el registro de llamadas telefónicas realizadas por el dirigente de la COD de Oruro, Jaime Solares se puede comprobar el vínculo entre este dirigente y la derecha (diputadas Norma Piérola, Senadora María Elena Méndez y Andrés Ortega).

Como *Gobierno de movimientos sociales* intentamos en todo momento someter a debate público estas tensiones y resolverlas por vías democráticas impulsando a que la vanguardia: indígenas, campesinos, trabajadores, obreros, vecinos y estudiantes siempre lleve por delante la bandera del *común*, el interés del común, de la comunidad que es toda Bolivia, privilegiándola, sin olvidar –evidentemente– la satisfacción gradual de los intereses más locales y particulares que también forman parte del diario vivir. En ese sentido, el horizonte comunitario no implica la anulación del individuo ni del interés privado, es más bien la existencia razonable de ese interés (privado, local) en medio de la satisfacción del interés común, de la Patria común, de la Patria de todos.

Aún así, hubo un momento que, ante la agresividad de un segmento de los movilizados, un sector de los indígenas (de Omasuyos, del valle cochabambino y los padres de familia de la ciudad de El Alto) consideró la posibilidad de una movilización revolucionaria para contener la acción de esos dirigentes del sector salud y educación que estaban buscando hacer de la movilización una acción política subordinada a la estrategia general de desgaste del Gobierno impulsada por la derecha neoliberal.

Al final la movilización quedó aislada; el Gobierno en consulta con los obreros mineros y las confederaciones indígenas y campesinas mantuvo su posición de defensa del interés *de todas y todos los bolivianos*, hizo conocer en detalle el programa en marcha de reactivación e industrialización del aparato productivo (de hecho apoyado unánimemente por la totalidad de los delegados sindicales de la COB presentes durante las negociaciones) y no cedió ante la tentación privatizante presente al interior de algunos dirigentes sindicales. Esto mostró que pueden existir formas democráticas y formas revolucionarias para resolver las contradicciones al interior del pueblo, y que es importante el trabajo de ideologización del movimiento sindical urbano a fin de reforzar los planteamientos comunitarios, comunistas y socialistas debilitando las focos de la ideología privatizante, corporatista y exclusivamente salarialista que aún están presentes, especialmente por la acción de residuos de la derecha partidaria y del trotskismo.

CUARTA TENSIÓN: EL SOCIALISMO COMUNITARIO DEL VIVIR BIEN

Una última tensión que impulsa la dialéctica y el proceso de nuestra revolución, es la contradicción creativa

entre la necesidad y voluntad de industrialización de las materias primas, y la necesidad imprescindible del *Vivir Bien* entendido como la práctica dialogante y mutuamente vivificante con la naturaleza que nos rodea.

Veamos primeramente el tema de la industrialización.

La nacionalización de los recursos naturales no puede completarse y expandirse si no se pasa a una segunda fase que es la industrialización de esos recursos. Se trata ciertamente de un tema de mejora en los ingresos del Estado pues los productos industrializados y semi-industrializados son portadores de un mayor valor agregado con el potencial de beneficiar económicamente al país en mayor medida a la actual simple exportación de materias primas. Pero además, la industrialización crea una capacidad productiva nacional, un manejo tecnológico y un conjunto de saberes científicos que dan al país una base para impulsar crecientes variedades de actividades industriales, intensivas en tecnología y mano de obra, que podrán transformar la rezagada infraestructura laboral primario-exportadora.

La industrialización de las materias primas es una antigua demanda popular emergente de la dolorosa constatación que a lo largo de 500 años Bolivia

aportó al mercado mundial ingentes cantidades de materias primas, dando lugar a emporios industriales y al crecimiento acelerado de las economías receptoras, pero dejando al país inerme y en la pobreza económica. Por eso es que durante los años 2006-2009, el *Gobierno de los Movimientos Sociales* se lanzó rápidamente a nacionalizar las empresas estatales anteriormente privatizadas del sector hidrocarburo (YPFB), Huanuni, Vinto, ENTEL, ENDE. Hoy, la mayoría, empresas públicas consolidadas pese a las dificultades de contar con personal técnico capacitado, la mayor parte inclinado a la actividad privada por el nivel de los salarios. Y a partir del año 2010, se inició la segunda etapa del proceso nacionalizador, consistente en la industrialización misma.

No es fácil avanzar, en primer lugar, porque no tenemos experiencia en ello, se trata de un proceso novedoso en el que hay que ir aprendiendo al mismo tiempo en que se lo realiza. En segundo lugar, porque es un proceso costoso y por tanto se requieren inversiones muy grandes, posiblemente las mayores de toda la historia económica del país. Una petroquímica, por ejemplo, cuesta cerca de 1.000 millones de dólares, una termoeléctrica grande, entre 1.000 a 3.000 millones de dólares, cantidades

nunca antes imaginadas por el país. Y en tercer lugar, porque se trata de un proceso largo, pues mínimamente se requieren de al menos 3 años para ver funcionar las industrias más pequeñas, 5 o 6 las medianas y 10 años o más, las más grandes.

El Gobierno ya tomó la decisión de industrializar el gas, minerales como el litio, el hierro, y algunas reservas de agua. Cada una de esas actividades productivas requiere mucho esfuerzo, tiempo y dinero, pero al final una vez puestas en marcha son ellas las que permitirán multiplicar los ingresos monetarios del país por tres, por cinco o más logrando una base duradera para mejorar salarios, construir más infraestructura, mejorar los bonos a los niños, a los ancianos, a las mujeres, etc. Esta es una de las mayores demandas históricas del pueblo boliviano como también lo fueron la plurinacionalidad y la autonomía, y nuestro Gobierno la asume como un reto a cumplir lo más pronto posible.

Algunos intelectuales políticamente erráticos han intentado interpretar este proceso de construcción de empresas públicas como un tipo de capitalismo de Estado, que no contribuiría a consolidar una mirada comunitarista. Cometan un terrible error conceptual que encubre un conservadurismo político sin excusa. Se

trata de un falso debate porque el capitalismo es, por definición, usufructo del trabajo ajeno para la acumulación de riqueza privada. Durante el capitalismo de Estado de los años 50, las empresas estatales se utilizaron para el beneficio de ciertos grupos particulares, de una clase burocrática que usufructuó personalmente de esos ingresos y los transfirió a otros sectores empresariales, intermediarios, hacendales, etc.

Por el contrario, los procesos de industrialización que está impulsando el Estado Plurinacional lo que hacen es, en primer lugar, generar un tipo de valor, en algunos casos bajo la forma de renta, que no se acumula privadamente ni se usufructúa dispendiosamente de manera privada. Esto marca una diferencia estructural con las experiencias previas de capitalismo de Estado. Pero además, el Estado Plurinacional que redistribuye la riqueza acumulada entre todos los sectores sociales, simultáneamente prioriza el *valor de uso*⁷ y la *necesidad* por

7 Al referirse al valor de uso de las mercancías, Marx señala: “La mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas del tipo que fueran (...)La utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso... Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuere la forma social de ésta” (El Capital, Tomo I/Vol,1, Siglo XXI Editores, 16a edición, pp.43-44)

encima del *valor de cambio*, es decir, la satisfacción de necesidades por encima del lucro y la ganancia. Es el caso de los servicios básicos declarados como un derecho humano y por tanto objeto de acceso en función a su necesidad y no a su rentabilidad, lo que lleva a políticas de subvención. El acceso al agua está subvencionada, lo mismo el crédito a los pequeños productores, y el Estado también compra productos agrícolas para garantizar soberanía alimentaria y su venta a precio justo. En ese caso, los precios para que los consumidores accedan a esos productos no se regulan por su *valor-mercantil* capitalista sino por su *valor de uso*. Entonces el Estado, a través del excedente generado en la industrialización, comienza a desprenderse gradualmente de la lógica capitalista de la apropiación privada como norma económica e introduce expansivamente la lógica del valor de uso, de la satisfacción de necesidades, de fundamento comunitario y comunista, como principio rector de actividades económicas.

Hablamos por tanto de otro régimen social en construcción con avances y retrocesos, eso es lo que estamos haciendo, potenciando al Estado como el mecanismo de generación de riqueza, no para la acumulación de una clase sino para su redistribu-

ción en la sociedad, especialmente entre los más humildes, los más pobres y los más necesitados, que son el alma, el sentido profundo y el norte final de todas nuestras acciones como Gobierno.

Pero a la vez, esta fuerza económica de generación de excedentes a ser redistribuidos entre la sociedad entera y utilizados para potenciar el *valor de uso* no capitalista genera un conjunto de efectos, de agresiones a la madre naturaleza, al medio ambiente, a la tierra, a los bosques, a los cerros, daños que a la larga afectan irremediablemente al propio ser humano.

Toda actividad industriosa tiene un costo natural, siempre ha sido así pero lo que hace el capitalismo es subordinar las fuerzas de la naturaleza, retorcerlas y degradarlas al servicio del valor de cambio, de la ganancia privada, no importándole si con ello se destruye el núcleo reproductivo de la propia naturaleza. En el fondo el capitalismo es suicida pues en su acción devoradora y devastadora destruye la naturaleza y a la larga también al ser humano. Nosotros tenemos que eludir ese destino fatal, y ahí la fuerza de la comunidad agraria se presenta como un horizonte, como un principio ordenador de la relación entre las necesidades del ser humano y las de la naturaleza como totalidad viva.

Las fuerzas productivas comunitarias y la ética laboral agraria incorporan una mirada distinta a la lógica capitalista respecto a cómo vincularnos con la naturaleza. Nos proponen ver a las fuerzas naturales como componentes de un organismo vivo, total, del que el ser humano y la sociedad son tan sólo una parte dependiente y que por tanto el usufructo de sus potencias productivas naturales, entendidas como tecnologías y saberes sobre la naturaleza, deben darse en el marco de una actitud “dialogante” y re-productora de esa totalidad natural.

Las formas comunitarias han desplegado una tendencia de una otra forma social del desarrollo de las fuerzas productivas en las que la naturaleza es concebida como la prolongación orgánica de la subjetividad humana, que se debe velar para su continuidad creadora pues de esa manera se garantiza también la continuidad de la vida humana para las siguientes generaciones.

“Humanizar la naturaleza y naturalizar el ser humano⁸” proponía Marx como alternativa al suicidio social y a la destrucción de la naturaleza im-

8 Marx. En el tercero de los *Manuscritos Económicos y Filosóficos* de 1844.

pulsada ciegamente por la lógica capitalista de la valorización del valor. A eso le llamaba Marx el comunismo, la realización de la lógica total del “valor de uso” de la naturaleza en el ser humano y del ser humano realizado en la naturaleza. En eso consiste el *Vivir Bien*: en utilizar la ciencia, la tecnología y la industria para generar riqueza, de otra manera con qué se podrían construir carreteras, levantar postas sanitarias, escuelas, producir alimentos, satisfacer las necesidades básicas y crecientes de la sociedad. Pero a la vez necesitamos preservar la estructura fundamental de nuestro entorno natural para nosotros y las generaciones que vendrán, que tendrán en la naturaleza la realización de sus infinitas capacidades para satisfacer sus necesidades sociales.

Industrializar sin destruir el fondo estructural del entorno natural-social de la vida, preservar las capacidades naturales para las futuras generaciones de todos los seres vivos pero a la vez producir riqueza para satisfacer las actuales necesidades materiales insatisfechas de la población, esa es la tensión, la contradicción viva que nos plantea el presente que no puede ser respondida por el capitalismo como tal, que sólo se preocupa por la riqueza material a costa de la destrucción de la riqueza natural, y ade-

más para el aumento de la ganancia de unos pocos, la ganancia privada de una clase social.

Necesitamos industrializarnos pero también cuidar la naturaleza y preservarla para los siguientes siglos. El capitalismo la depreda, la destruye, la utiliza con fines de lucro y no para la satisfacción de las necesidades.

Esta tensión creativa es la que el Presidente Evo ha llamado el *socialismo comunitario del vivir bien*, la satisfacción de las necesidades materiales humanas mediante el diálogo vivificante con la naturaleza, preservándola para preservar también el destino y el bienestar común de las futuras generaciones de todos los seres vivos.

La inclinación hacia el industrialismo desbocado lleva a la reproducción de la dinámica depredadora y a la conversión de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas de la sociedad y de toda la naturaleza, y a su vez, la actitud contemplativa de la naturaleza lleva a la preservación de las carencias materiales de la sociedad, y en ambos casos, a la continuidad del proceso de producción y reproducción capitalista de los seres humanos. En cambio, vivir la tensión permanentemente, desplegando las capacidades técnicas del conocimiento que afectan

el entorno natural pero que también son capaces de reproducir el fondo estructural de ese entorno natural es el gran desafío para eludir y superar las formas “grises” o “verdes” de la vorágine capitalista.

LAS TENSIONES SECUNDARIAS CREATIVAS COMO FUERZAS PRODUCTIVAS DEL PROCESO DE CAMBIO

Nos hemos referidos a cuatro tensiones creativas al interior del bloque popular, contradicciones que han emergido por el propio curso de las cosas, que a pesar de las complicaciones o diferencias que generen entre los distintos sectores sociales populares y al aprovechamiento que hagan de ello los sectores reaccionarios de la vieja élite neoliberal, son tensiones, temáticas y divergencias que visibilizan debates al seno del pueblo, que involucran a la sociedad laboriosa ya sea para observar, defender, acelerar o fortalecer su proceso revolucionario. Por eso son contradicciones vivificantes y dialécticas de nuestro Proceso de Cambio, *fuerzas productivas* de la revolución cuya existencia y tratamiento democrático y revolucionario nos permitirán avanzar.

Se trata de tensiones propias de un proceso revolucionario que tiene que afrontar problemas, contra-

dicciones y nuevas luchas no previstas ni planificadas con anterioridad porque así son las verdaderas revoluciones. Quienes crean que las revoluciones son una *tasa de leche* de unanimidad absoluta no saben de lo que hablan, y malinterpretan el término de revolución que lo entienden sólo a través de libros. Las revoluciones son flujos caóticos de iniciativas colectivas sociales, impulsos fragmentados que se cruzan, se enfrentan, se suman y articulan para volver a dividirse y cruzarse. Nada está definido de antemano. No se tiene un programa escrito o una propuesta que sea capaz de preveer lo que vendrá.

Cada revolución es única por las fuerzas que la promueven, por la historia de los adversarios que enfrenta, por los problemas, territorios y raíces singulares e irrepetibles de quienes se involucran. Las revoluciones son flujos de lava social que se despiertan por todas partes y hacia todas partes y en las que cada nuevo paso es un referéndum mismo sobre el curso de la revolución. Las revoluciones no tienen un curso predeterminado, si lo tuvieran no serían tales sino decisiones burocráticas de un poder que ha expropiado el alma al pueblo. Ellas avanzan, se detienen, retroceden, se caen y vuelven a avanzar nuevamente, a veces sin

saber bien cuál es el siguiente paso, inventando a cada rato su itinerario.

Las luchas y contradicciones no pueden pues asustar a los revolucionarios porque son la sangre, el hálito de vida, el impulso fundante de las sociedades, de las clases sociales, de la propia vida de los revolucionarios, del cielo que nos cobija a todos.

La vida es sinónimo de lucha sumada a contradicción, y en el caso de nuestra revolución, las clases populares, su vanguardia indígena-campesina-obrera y vecinal es la condensación viviente de esas contradicciones, de esas luchas, cuyo producto será su auto-emancipación. Comprenderlas y articularlas como un flujo de *voluntad de poder* común, comunista, capaz de remontar a cada paso las iniciativas de las clases pudientes y conservadoras, es la tarea del *Gobierno de los Movimientos Sociales*, teniendo presente que habrán victorias temporales y derrotas hirientes que nos obligarán a conseguir nuevas victorias y así hasta el infinito, hasta que el tiempo histórico conocido hasta hoy se detenga, se quiebre y surja uno nuevo, universal, de los pueblos del mundo en el que el bienestar de la humanidad sea el producto consciente y deseado del trabajo de todas y todos.



Vicepresidencia del Estado
Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional

Isk'a Marka Sullka Iyariña Uta
Taqi Marka Kanachi Wakkhala Tariyachani Uta

Ukajta Umalinta
Nawiri Llapikamachta Tariyay Umalinta

Tikamachigani Jaksirgani Jembipay
Tikarirni Homboni Mhorkuapay Otray Jirichu Jembipay

BOLIVIA